

¿ESTÁ MUERTO PINOCHET?

Sí, completamente muerto. Para asegurarse, en diciembre de 2006 el nieto del general Prats, predecesor de Pinochet, escupió en la capilla ardiente sobre el cuerpo horriblemente hinchado, como consecuencia de su adicción al chocolate y otros dulces, del antiguo dictador. Prats había heredado la postura de su abuelo, que junto a su mujer voló por los aires en su coche por orden de Pinochet; un crimen cobarde típico de la naturaleza traicionera del dictador. La familia Prat recuerda perfectamente cómo los Pinochet les visitaban con frecuencia mientras el abuelo Carlos era comandante en jefe, siempre mostrando una disposición servil y sumisa. Aun así, su nieto necesitó coraje para este gesto final, habida cuenta de que Pinochet continúa atrayendo el fervor de una mafia santiagueña avejentada pero poderosa y llena de odio. Dirigidos por los partidos derechistas, dieron una vociferante muestra de ello con ocasión del funeral; protegidos como siempre por el Ejército, que de manera vergonzante había sido autorizado por el gobierno de Bachelet para rendir los honores finales a su antiguo comandante en jefe. En un gesto de mínima dignidad, la propia presidenta se negó a rendirle honores de jefe de Estado. Ella misma junto a su madre, había sufrido la prisión y la tortura bajo Pinochet después de que su padre, el general Bachelet hubiera sido brutalmente asesinado en pago a su lealtad al presidente Allende.

Las pompas militares resultaron especialmente grotescas, habida cuenta de que Pinochet había pasado sus últimos días bajo arresto domiciliario por sus crímenes contra la humanidad, y se encontraba a la espera de juicio por una malversación de fondos públicos sin precedentes en la historia de Chile. En este pequeño país, con una rara tradición espartana del servicio público, ningún otro presidente ha sido juzgado o condenado por crímenes contra los ciudadanos o el Estado, aunque un par de ellos hayan podido merecerlo en menor grado. Los funerales se realizaron bajo el techo protector de la Academia Militar, en un elegante y exclusivo barrio de Santiago; el cuerpo fue rápidamente trasladado en helicóptero hasta el crematorio y las cenizas recibieron sepultura en una aislada propiedad junto al mar para evitar las manifestaciones populares.

Al mismo tiempo un acto contrario se producía frente al palacio presidencial de La Moneda. Bajo la estatua de Salvador Allende, a pocos metros

del lugar donde fue obligado a suicidarse tras el golpe de Estado de 1973, la gente celebraba la muerte del dictador con música y baile. A pesar de todo, su ánimo resultaba un poco apagado y su festejo un poco forzado, como igualmente sucedió con las masivas celebraciones populares que se produjeron de manera espontánea por todo el país. Se parecían más a aquellas que se producen cuando un equipo de fútbol local va perdiendo un partido importante y alcanza un empate en el último minuto. Muchos chilenos entre los que se incluye este autor, pronto se olvidarían de la fecha exacta del acontecimiento.

Temores subterráneos

A nadie se le escapa que, aunque por fin Pinochet pueda estar muerto, su legado todavía perdura; aunque con cierta prudencia creo que en gran medida también está en su fase final. Un síntoma de ello puede ser la sucesión de protestas y luchas laborales que han sacudido el país en los dos últimos años. La que alcanzó mayor resonancia internacional fue la larga y victoriosa huelga que los mineros de Escondida, la mayor mina de cobre del mundo al norte del desierto de Atacama, mantuvieron entre agosto y septiembre de 2006. Atrajo un inusitado grado de atención, especialmente del *Financial Times*, probablemente porque su propietaria, BHP Billiton, transfiere de manera regular cientos de millones de dólares a la City londinense en concepto de arrendamiento del terreno¹. Un puñado de multinacionales, la mayor parte de ellas cotizadas en el mercado de valores londinense, controlan el 70 por 100 de las exportaciones chilenas de cobre. El resto de la producción, así como la mitad de las reservas, permanecen en manos de Codelco, la gigantesca empresa estatal heredada del presidente Allende. Su gobierno nacionalizó todos los recursos mineros e, incluso la Constitución de 1980, todavía en vigor, los declara derechos «inalienables». Sin embargo, una vuelta de tuerca legislativa introducida por Pinochet y que los gobiernos democráticos han mantenido hasta la fecha, ha permitido a las empresas privadas hacerse cargo de estos recursos y explotarlos bajo acuerdos a largo plazo. Las políticas neoliberales han exonerado a las multinacionales de pagar un solo penique en concepto de *royalties* y la mayor parte de ellas tampoco ha pagado impuesto alguno. Una ley promulgada en 2004 por el gobierno de Lagos, inadecuadamente llamada «Royalty 2», establecía una tímida sobretasa del 5 por 100 sobre los beneficios de la minería. Sin embargo, en la práctica esto se tradujo en una reducción efectiva del 2 por 100 para las empresas que habían estado estafando en sus liquidaciones de impuestos. BHP Billiton, la única compañía minera que durante la década de 1990 había estado pagando algún impuesto sobre los ingresos, se encuentra embar-

¹ Chile apenas aparece en la prensa internacional, excepto cuando ocurre algo relacionado con Pinochet. Aun así, durante el mes y medio que duró la huelga de Escondida en 2006, el *Financial Times* publicó 119 artículos sobre ella, incluyendo cuatro titulares en su portada.

cada en una huelga tributaria, considerando que no ha recibido un trato justo. Esto realmente es cierto. Mientras BHP Billiton vio como se elevaba el impuesto sobre sus beneficios del 35 al 40 por 100, las otras compañías que habían estado en general eludiendo sus obligaciones tributarias, vieron su tipo impositivo nominal reducido del 42 al 40 por 100². En 2006, las transferencias de estas compañías eran el equivalente al 75 por 100 del presupuesto total del Estado chileno. Durante la huelga de Escondida, los sindicatos solicitaron públicamente la vuelta a la propiedad estatal de la industria del cobre. Más recientemente, el sector de los mineros que trabajan subcontratados, aproximadamente la mitad del total, consiguieron una negociación de conjunto que resultó satisfactoria.

En mayo de 2007 los trabajadores subcontratados de la industria de la madera, al sur del país, alcanzaron los mismos objetivos. Por primera vez estos conflictos rompieron la restrictiva legislación laboral chilena que prohíbe una negociación sectorial, y permite la negociación colectiva solamente en las empresas individuales. El punto de inflexión de la huelga en las compañías madereras se produjo cuando un joven trabajador estrelló su tractor contra una barricada levantada por la policía que disparó produciéndole la muerte. Ganaba un salario neto mensual de 60.000 pesos chilenos, equivalentes a 120 dólares, mientras la industria maderera había alcanzado unos beneficios de miles de millones³. Su entierro convirtió la ciudad de Arauco en una gran manifestación, en la que cada casa ondeaba una bandera negra a media asta. Una situación similar se produjo al mes siguiente en Santiago, cuando los trabajadores subcontratados de las empresas de recogida de basuras también fueron a la huelga y obtuvieron sus reivindicaciones. Conviene resaltar que todos estos movimientos son técnicamente ilegales. Las primeras grandes huelgas se producen en industrias donde una parte significativa de la mano de obra está atomizada entre cientos de subcontratas, que ofrecen un trabajo agotador y mal pagado, con muy pocos derechos laborales y altamente precario, situación, por otra parte, en la que se encuentra la mayor parte del empleo en el Chile actual.

Mientras tanto, multitudes de trabajadores urbanos se han amotinado en Santiago, la descontrolada capital que alberga a más de la tercera parte de los 16 millones de personas que forman la población del país, en contra de una reforma del transporte público que ha producido el caos. Desde febrero de 2007, contratistas privados a gran escala reemplazaron los miles de autobuses privados que solían surcar la ciudad. Los anteriores, que proporcionaban un servicio de poca calidad, congestionaban las calles y con-

² Con anterioridad al año 2004, estas compañías habían buscado protección bajo una cláusula de «invariabilidad fiscal», a la que se podían acoger las empresas inversoras extranjeras, que les exigía pagar el 42 por 100 de cualquier beneficio declarado y no declarar nada más. «Royalty 2», redujo esta tasa al 40 por 100, en el preciso momento en que los elevados precios del cobre hacían que resultara imposible el continuar eludiendo los impuestos.

³ El tipo de cambio está aproximadamente en 500 pesos chilenos por dólar.

taminaban el aire, fueron un producto de la temprana privatización que realizó Pinochet de la compañía municipal, que había empezado a funcionar durante el periodo desarrollista anterior y que había proporcionado un servicio aceptable. Los usuarios están furiosos ante la incompetencia de los nuevos contratistas y la falta de subvención y pobreza del diseño que se conoce como «TranSantiago», que después de muchos meses todavía no funciona de manera adecuada. Hace poco tiempo un convoy del metro, atestado de pasajeros, sufrió la rotura de una rueda, y el servicio quedó interrumpido durante media hora. Según recogía la prensa, la causa estaba en la sobrecarga de pasajeros. Una multitud enfadada desbordó la estación de Alameda, levantó barricadas y estuvo enfrentándose con la policía durante horas. Quizá el aspecto más sobresaliente de esta protesta es que los que se vieron implicados no eran simples marginados sin empleo, amotinándose en sus *poblaciones* como habían hecho otras veces, sino trabajadores asalariados camino de sus trabajos.

Revuelta en los colegios

Un año antes, en marzo de 2006, un millón de estudiantes de educación secundaria habían ocupado sus colegios y tomado las calles, calurosamente apoyados por profesores, padres y la gran mayoría de la población. A los estudiantes de instituto se les conoce cariñosamente como «pingüinos», y realmente cuando salen en bandada del colegio, con sus uniformes blancos y azules oscuros, se parecen a las aves del Antártico. De manera tradicional suelen producirse manifestaciones en las calles cada año, poco después de haber empezado las clases, lo que en el hemisferio sur sucede en el mes de marzo. En esta ocasión, sin embargo, en una semana el movimiento se extendió desde un pequeño grupo de colegios, a todo el sistema educativo. Todavía más significativo es que los «pingüinos» no pedían transporte gratuito o reivindicaciones similares, sino la abolición de la LOCE, la ley general de educación.

La LOCE fue promulgada en 1990 por Pinochet en su último día en el cargo y permanece siendo el marco básico que ha estimulado una privatización continua del sistema educativo. Ningún gobierno democrático hasta ahora se ha atrevido a cuestionarla. El programa educativo de Bachelet, se ha limitado simplemente a pedir más guarderías, como si todo lo demás estuviera bien, lo cual no es en verdad el caso. El desmantelamiento del sistema público, brutalmente impuesto por la dictadura y que continuó a menor ritmo con la LOCE, ha provocado desde 1974 la desaparición de 700.000 estudiantes de primaria y secundaria, aproximadamente la cuarta parte de los existentes en aquél año. Los alumnos que han abandonado la enseñanza pública han emigrado a las escuelas privadas, creadas con el atractivo de los subsidios estatales. Desde 1990, los esfuerzos de los gobiernos democráticos para restaurar el gasto público en educación, que había quedado reducido a la mitad con la dictadura, han sido ineficaces a la hora de detener el proceso. La educación pública continúa per-

diendo decenas de miles de estudiantes cada año. En la actualidad, la mitad de los estudiantes se encuentran en colegios y universidades privadas, y las familias desembolsan el 50 por 100 de las tasas académicas, mientras que en la Unión Europea el porcentaje oscila entre el 8 y el 19 por 100. El deterioro de la calidad de la enseñanza, la segmentación social y la injusticia del sistema privado de educación, son tan severos que provocaron la protesta estudiantil y la puesta en marcha de una revisión del sistema.

Cuando se les preguntaba cuál podría ser la solución, el 70 por 100 de los chilenos respondían que las escuelas debían volver al Ministerio de Educación. Muchos de ellos recordaban que a finales de la década de 1960, el Estado había desarrollado un sistema público de enseñanza bastante bueno, con una cobertura relativamente alta en todos los niveles educativos. La mayoría de los chilenos mandaban a los niños al colegio sin ningún coste para la familia. En conjunto, el impacto de las políticas neoliberales ha reducido la proporción total de estudiantes, tanto en la escuela pública como en la privada, en relación a la población total. Desde el 30 por 100 en 1974, al 25 por 100 en 1990, y al 27 por 100 en la actualidad. Si una tasa de natalidad descendente ha hecho posible hoy en día alcanzar una cobertura completa en los niveles primarios y secundarios, el país se ha quedado seriamente rezagado en cuanto se refiere al nivel superior, donde la cobertura, aunque ahora está aumentando, todavía se queda en el 32 por 100. Estas cifras son la mitad de las que se producen en países vecinos como Argentina y Uruguay, y mucho más bajas que las de los países desarrollados; Corea del Sur alcanza un récord del 98 por 100. Sin embargo, la cobertura de la educación superior de la quinta parte de la población chilena con mayores recursos, muchos de los cuales estudian en nuevas universidades privadas, también supera el 70 por 100.

La reforma reciente ha derogado la LOCE sustituyéndola por un marco legal que reconoce el derecho de los ciudadanos a una educación de calidad y además restablece en parte la capacidad del Estado para regular el sistema educativo. Se han anunciado nuevas inversiones que deberían elevar el gasto público en educación del 3,5 por 100 del PIB en 2007 al 4,0 en 2008. Pero no hay que olvidar que a principios de la década de 1970, Chile destinaba el 7 por 100 de su PIB a este propósito. De cualquier forma, la mayor parte de este aumento irá a parar a becas suplementarias otorgadas en función del alumno, según un sistema de cupones inspirado en la LOCE. El valor de los cupones para estudiantes pobres, la mayor parte de los cuales están en los colegios públicos, subirá más que los del resto. Se ha creado un fondo adicional de 100 millones de dólares para mejorar los colegios públicos que se distribuirá según una base presupuestaria. Hay que señalar que la LOCE prohibía que el Estado subvencionara sus propias escuelas al margen del sistema de cupones. Esto se consideraba una «competencia desleal» con los centros privados que recibían los mismos cupones; por supuesto esta prohibición no afectaba a estos últimos. Los pormenores de esta reconstrucción parcial de la escuela pública per-

manecen todavía sin desvelar. El sistema público levantado hace un siglo fue desmantelado por Pinochet, y las escuelas pasaron a depender de unos municipios que en la mayoría de los casos carecían tanto del conocimiento como de los fondos para administrarlas adecuadamente.

El famoso sistema de pensiones chileno, otra herencia de la dictadura, tampoco se encuentra en buen estado. La aplastante evidencia ha mostrado que dos tercios de la fuerza de trabajo no tienen ninguna cobertura de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mientras el resto, a lo más que puede aspirar es a unas pensiones exiguas e inciertas. Aun así, casi todo el mundo se encuentra obligado a contribuir con el 13 por 100 de su salario a las AFP, en el caso de que se las arreglen para tener un trabajo formal⁴. Estos administradores privados, en conjunción con compañías de seguros afines, se han apropiado de uno de cada tres pesos que han contribuido al sistema desde 1982. El saldo se ha invertido mayoritariamente en un puñado de grandes empresas, y entre la docena de grandes grupos que reúnen la mitad de los fondos que se invierten en el país, se encuentran las AFP y las compañías de seguros. De esta manera, la privatización del sistema de pensiones ha significado que unas cifras que en la región suponen la mitad del PIB hayan pasado de los bolsillos de los trabajadores a los bolsillos más profundos de las grandes empresas.

El gobierno de Bachelet está ahora revisando el sistema. Las reformas en curso asumen que el Estado tendrá que hacerse responsable de la mayoría de los futuros pensionistas, y establece para ellos una pensión auténticamente universal y libre de impuestos aunque muy básica. Su cuantía se ha establecido en los 75.000 pesos, aproximadamente dos tercios del salario mínimo. Todos aquellos que perciban de las AFP menos de 200.000 pesos mensuales recibirán la pensión básica, por lo menos hasta que alcancen esa cuantía. La tercera parte de los trabajadores con pensiones de las AFP superiores a 200.000 pesos, continuarán en la misma situación en la que se encuentran: obligados a contribuir a las AFP y esperando cobrar unas pensiones que serán la mitad de lo que hubieran sido bajo el antiguo sistema «de reparto». La situación de la mujer es todavía peor.

Parece claro que, tarde o temprano, esta intolerable situación tendrá que afrontarse. Las encuestas señalan que una gran mayoría de los trabajadores chilenos en activo volverían al sistema antiguo de reparto de pensiones públicas si pudieran hacerlo, que por otra parte sigue acogiendo a las tres cuartas partes de los pensionistas actuales. Situaciones similares han surgido en Argentina y Perú que, después de haber copiado parcialmente el modelo de las AFP durante la década de 1990, permiten a los asalariados volver a los sistemas de «reparto» que existían anteriormente. Decenas de miles de argen-

⁴ Una pequeña parte de los asalariados, menos del 4 por 100, entre los que se incluyen los militares y aquellos que en 1981 rechazaron cambiarse al sistema de las Administradoras, contribuyen a las antiguas Cajas de Previsión, mientras que todos los demás tienen cuentas con las AFP.

tinios se lanzaron masivamente el primer día que entró en vigor la autorización, en mayo de 2007. El primero de la lista era el propio Kirchner.

Finalmente Bachelet escuchó las llamadas de los economistas de todo el espectro político para reducir la peculiar normativa fiscal chilena de mantener un «superávit presupuestario estructural» del 1 por 100 del PIB. Recientemente anunció que para 2008 reduciría este porcentaje al 0,5 por 100. El gobierno de Lagos había convertido formalmente esta norma en ley, a pesar incluso de que el fallecido Rudi Dornbusch hubiera considerado «estúpido» el proyecto y hubiera sido antiguo profesor del ex ministro de Finanzas Nicolás Eyzaguirre, el «cerebro» del plan. Los actuales superávits presupuestarios chilenos, en oposición a la llamada media «estructural» a largo plazo, han resultado bastante grotescos desde que el precio del cobre se disparara en 2004, y alcanzara el 10 por 100 del PIB en 2006. Además, la austeridad presupuestaria de Eyzaguirre durante los años de la recesión entre 1998 y 2003, ha sido ampliamente responsabilizada de la severidad y duración de la depresión.

Cambiar los modelos

Las llamadas para cambiar en Chile *el modelo* –el modelo neoliberal– provienen ahora de lugares sorprendentes. Las voces críticas se oyen cada vez más por todo el espectro de la coalición gobernante, la llamada Concertación de Partidos por la Democracia. No solamente en el Partido Socialista, sino también entre los demócratacristianos quienes hace poco, han presentado una encuesta según la cual el 82 por 100 de los chilenos deseaban «un cambio de modelo». Incluso el antiguo presidente de la república, el demócratacristiano Eduardo Frei, conocido por privatizar servicios públicos durante la década de 1990, pedía que el transporte público volviera a la propiedad estatal como solución a la debacle de «TranSantiago». El líder económico de este movimiento es Ricardo Ffrench-Davis, otro demócratacristiano y miembro de la CEPAL, el organismo de la ONU para el desarrollo de América Latina. Incluso desde la derecha se escuchan voces parecidas.

Por la izquierda, el Partido Comunista y el Partido Humanista han sido críticos con el *modelo* desde hace mucho tiempo y actualmente obtienen, en unión de otros grupos más pequeños, alrededor del 10 por 100 del voto nacional. Sin embargo todavía están marginados por el sistema electoral «bipartidista» de Pinochet que facilita generosamente la representación parlamentaria de la Alianza por Chile, el principal opositor de la Concertación. Con la Constitución de 1980, cada distrito electoral elige dos candidatos para la Cámara de Diputados y dos para el Senado. Cada coalición presenta una lista con dos candidatos por distrito. Para obtener ambos escaños, la coalición mayoritaria, normalmente la Concertación, necesita obtener por encima de los dos tercios de los votos. Por debajo de este porcentaje, el escaño pasa al siguiente grupo. En la práctica, la Concertación obtiene más del 50 por 100 del voto en casi todos los distritos electorales, y obtiene un re-

presentante en todos ellos. De cualquier forma, raras veces consigue doblar en votos a la derecha, que tradicionalmente obtiene un porcentaje ligeramente superior a la tercera parte del voto en la mayoría de los distritos y en el porcentaje nacional.

El sistema empeora todavía más por el hecho de que el diseño de los distritos, especialmente en lo que se refiere al Senado, se ha realizado de tal manera que proporciona una mayor representación a regiones donde la derecha es mayoritaria, tales como algunas zonas rurales lejanas y escasamente pobladas, que obtienen en el Senado la mitad de representantes que la propia ciudad de Santiago. De esta manera, la derecha, con un tercio de los votos se asegura cerca de la mitad de los escaños en ambas Cámaras, mientras que los partidos a la izquierda de la Concertación quedan completamente excluidos y, a pesar de que en algunos distritos obtienen hasta el 20 por 100 de los votos, nunca alcanzan la proporción necesaria para obtener un representante.

Sin embargo, en la calle los partidos izquierdistas lideran un movimiento social que ha recibido un amplio apoyo. Todos los que se muestran a favor de «cambiar el modelo» se han reunido en torno a un Parlamento Social, convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, las federaciones nacionales de estudiantes y las principales organizaciones sociales. Todos los partidos políticos, excepto los de la derecha, están formalmente representados en el Parlamento Social, incluidos los que forman la coalición gobernante que, por primera vez desde la década de 1980, han aceptado participar junto a los comunistas. El programa del Parlamento Social pide grandes reformas en la educación, las pensiones, la legislación laboral y el sistema electoral. El establecimiento de derechos sobre el cobre y otras riquezas naturales también es un punto importante de esta plataforma.

El gobierno de Bachelet y especialmente la propia presidenta, está menos identificado con *el modelo* que sus predecesores, y se están produciendo algunos cambios limitados en la política social, principalmente en pensiones y educación. De cualquier forma, en este punto en concreto, las propuestas de reforma que se están discutiendo en el Parlamento se quedan muy lejos de tocar las bases del modelo. Cabe preguntarse ¿cómo es posible que, a pesar de la existencia de esta corriente mayoritaria a favor del cambio, *el modelo* siga siendo hegemónico en la política oficial chilena, incluso más allá de la esfera estrictamente económica? La respuesta a esta pregunta tiene mucho que ver con los acuerdos políticos de la transición, el periodo que siguió en 1989 al fin de la dictadura.

¿Más allá de lo «posible»?

La dictadura de Pinochet finalizó en 1989, después de una larga lucha a lo largo de toda la década, como consecuencia de una profunda crisis económica. Millones de chilenos se embarcaron en su propia intifada a la que

llamaban protestas nacionales. Acompañando a estas protestas, existía una sofisticada guerrilla urbana, dirigida por los comunistas, que en 1986 estuvo a punto de acabar con la vida del dictador. En el momento cumbre de las manifestaciones, se vivieron momentos muy sangrientos, con más de sesenta muertos a manos de los militares en Santiago solamente en una noche. En ese clima, fuertemente presionado por Estados Unidos, y concretamente por el Comando Sur de sus Fuerzas Armadas, Pinochet se vio obligado a negociar una salida con los sectores moderados del movimiento democrático. En 1988 la oposición consiguió desalojar al dictador mediante un plebiscito y elegir sucesivamente a cuatro coaliciones de gobierno: la primera de 1990 a 1994 encabezada por Patricio Aylwin, la segunda de 1994 a 2000 por Eduardo Frei, ambos demócratacristianos, la tercera de 2000 a 2006 encabezada por Ricardo Lagos, la cuarta en 2006 por Michelle Bachelet, ambos del Partido Socialista.

El pacto de los partidos centristas con Pinochet buscaba el aislamiento de los comunistas y de otras fuerzas democráticas radicales, y proporcionaban al dictador otra década como comandante en jefe del Ejército. La Constitución que firmó en 1980 ha seguido vigente, aunque con algunas modificaciones. Pero mientras muchos puestos relevantes y la mayoría de los escaños parlamentarios, han ido a parar a personalidades y partidos estrechamente vinculados al modelo desarrollista anterior, el papel dirigente lo ha asumido una joven y agresiva burguesía chilena. Este grupo ejerce un control total sobre los bancos y las corporaciones en una economía donde la propiedad estatal se ha reducido de manera significativa; igualmente domina la mayoría de los medios de comunicación. A través de los partidos de derechas, la Unión Demócrata Independiente y la Renovación Nacional, este grupo hace uso de las prerrogativas heredadas de Pinochet, para controlar prácticamente la mitad del Parlamento y tener un derecho de veto efectivo sobre todas las cuestiones de Estado importantes. Los miembros de los grupos de presión, muchos de ellos ex ministros o altos funcionarios de gobiernos democráticos se mueven a su antojo y mantienen consultoras privadas en los edificios del Parlamento y del Gobierno, incluyendo el palacio presidencial. Además de ello, la ideología neoliberal ha mantenido su hegemonía sobre la educación, los cuadros gubernamentales y las políticas públicas, especialmente en los ámbitos de la economía y la política social, así como sobre la administración del Estado y las iniciativas de modernización.

Atascados en la transición

Este estado de cosas ha sobrevivido durante un «periodo de transición» que ha durado tanto tiempo como la dictadura a la que reemplazó. El acuerdo de transición, recibió un apoyo masivo, aunque a regañadientes, de la población chilena, especialmente de unas clases medias en expansión que habían recibido poca atención y que después de décadas de postración económica y exclusión política se mostraban muy cautelosas en sus demandas. Esta situación es la que llevó a la famosa declaración de Patricio Aylwin, en

la década de 1990, en el sentido de que en Chile, incluso la verdad y la justicia podían alcanzarse «dentro de los límites de lo posible».

El crecimiento económico ha jugado su papel en esta transición prolongada. Bajo los tres primeros gobiernos, después de 1989, la economía creció a un ritmo muy rápido hasta 1997, cuando entró en una recesión que duró hasta 2003. El impresionante crecimiento económico de la década de 1990 permitió que casi todas las cosas en Chile se multiplicaran por dos, tres o incluso cuatro⁵. El gasto público creció más rápidamente que el PIB entre 1989 y 2000, y un poco más lentamente desde 2000 hasta 2005 con el gobierno de Lagos; lo mismo sucedió con el gasto en programas sociales. Como resultado, aunque el presupuesto chileno se triplicó durante este periodo, 2,8 para ser exactos, no es más que una quinta parte del PIB, lo cual es bajo incluso para los estándares de América Latina. Aún así, el gasto público en salud se multiplicó por 3,4 desde 1990 a 2005, y en educación se multiplicó por 4,4. Con la presidencia de Bachelet, el gasto público ha estado creciendo un 10 por 100 anual, significativamente por encima del PIB, especialmente en lo que se refiere al gasto social,

La inversión en infraestructuras ha sido impresionante. Durante este periodo las carreteras, embalses, ferrocarriles, líneas del metro y autopistas han visto duplicarse sus recorridos, o por lo menos han sido modernizadas por completo. La ciudad de Santiago es un escaparate del impresionante ritmo de desarrollo económico del país. Por todas partes, las grúas muestran el crecimiento de edificios elevados, y las vías urbanas se extienden de tal manera que incluso los *santiaguinos* más viejos se pierden en una ciudad que ya no reconocen. La experiencia quizá sea similar a la que han vivido las principales ciudades europeas durante la segunda mitad del siglo XIX o las de Estados Unidos en el XX. Cuando los turistas visiten Santiago a finales del siglo XXI, probablemente se quedarán sorprendidos de ver que la mayoría de las construcciones de la ciudad parecen haber sido levantadas en este periodo. El panorama es comparable al surgimiento de ciudades en el este de Asia, aunque la población de Santiago de seis millones de habitantes sea pequeña en relación a ellas. En resumen, la cara de Chile cambió de manera significativa y favorable durante el periodo de la transición. En una tierra reconocida por sus poetas y que ahora vuelve a experimentar una ebullición artística, no sería ninguna sorpresa si algún Baudelaire chileno estuviera ahora escribiendo en los nuevos bulevares que surcan Santiago⁶.

⁵ El PIB aumentó un 80 por 100 entre 1989 y 1997, medido respecto a los parámetros de 1986 y más de un 33 por 100 entre 1997 y 2005, medido de acuerdo con los nuevos parámetros de 1996. Esto significa que el PIB en conjunto se multiplicó por 2,3 desde 1990 hasta 2005. El crecimiento se ralentizó hasta el 4 por 100 en 2006, pero para 2007 y 2008 se espera que se recupere hasta el 6 y 7 por 100.

⁶ La visionaria obra de Marshall Berman, *All that is Solid Melts Into the Air* (1983), ayudaría mucho a cualquiera que en estos días, se interese por Santiago [ed. cast.: *Todo lo sólido se desvanece en el aire*, Madrid, Siglo XXI, 1991].

En el mismo periodo, la población del país aumentó solamente un 22 por 100, desde 13 millones en 1990 hasta 16 millones en 2005, lo que significa que los bienes disponibles han aumentado significativamente más deprisa que los chilenos. De hecho, la pobreza se ha reducido desde aproximadamente la mitad de la población, a finales de la década de 1980, a un quinto en 2003, mientras el número de indigentes caía alrededor del 6 por 100. Los indicadores de sanidad y educación, así como el Índice de Desarrollo que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han crecido de manera impresionante. No obstante, la mayor parte de este crecimiento económico ha beneficiado a las capas de población con mayores ingresos. Los salarios reales medios, por ejemplo, se han recuperado solamente un 53 por 100 entre 1990 y 2004, menos de la mitad del aumento del PIB. El peso de los salarios en el PIB se encuentra actualmente por debajo del 40 por 100, peor que a finales de la dictadura; antes del golpe de Estado, estaba por encima del 60 por 100. El nivel de los salarios reales a finales de la dictadura estaba un 25 por 100 por debajo de los niveles anteriores al golpe, y solamente en diciembre de 1999 los trabajadores chilenos recuperaron el poder adquisitivo que tenían con anterioridad al golpe. En el caso de los maestros, sus salarios en 1990 eran solamente dos tercios de lo que ganaban a principios de la década de 1970, y en la actualidad siguen manteniéndose un 20 por 100 por debajo.

La distribución de los ingresos se ha deteriorado, pues, gravemente durante este periodo. Si se tienen también en cuenta el gasto social público y las pensiones no contributivas, la situación era tan mala en 2003 como en 1990. Pero si las pensiones contributivas, las pensiones de los militares y las transferencias que se realizan a las AFP también se incluyen, el gasto público ha sido en general regresivo. Para ser exactos, hubo una tímida reforma tributaria en 1990, e inicialmente una recuperación significativa del gasto social público dirigido hacia los sectores más desfavorecidos de la población. Además los salarios de los empleados públicos, que habían sufrido un hundimiento mayor que la media durante la dictadura, inicialmente experimentaron una rápida recuperación, en el contexto de un alza, lenta pero mantenida de los salarios en general. La afiliación a los sindicatos y la negociación colectiva también experimentaron un repentino aumento durante unos años, para volver a caer más tarde a un nivel muy bajo; en la actualidad solamente un 11 por 100 de los trabajadores están afiliados a algún sindicato. Todo esto produjo una breve mejora de la distribución de la renta. Pero el aumento mucho más rápido de los beneficios de las empresas, durante la explosión de la década de 1990 y de nuevo en 2004, volvió a deteriorar la distribución de ésta a partir de 1993; de manera muy acelerada si no se tiene en cuenta la inversión social pública.

Ciertamente, desde el final de la dictadura se han verificado en Chile cambios significativos, pero éstos se han producido mayoritariamente en las esferas militar y política. El fin del gobierno de Pinochet y el establecimiento del acuerdo de «transición» fueron los más evidentes. Menos aireada, pero más significativa, ha sido la subordinación del Ejército a las autoridades ci-

viles, que comienza en 1997 cuando Pinochet abandona la jefatura de las Fuerzas Armadas y que ha avanzado de manera manifiesta hasta la fecha. Sirve de ejemplo el discurso que realizó el nieto de Pinochet durante sus funerales. El joven oficial rompió el protocolo para soltar una encendida arenga. Lo mismo hizo un comandante en el sur del país. Ambos fueron expulsados del Ejército y despojados de sus cargos.

Crímenes y castigos

Todos estos acontecimientos se produjeron sobre todo a partir del mes de octubre de 1998, cuando Pinochet fue detenido en Londres y mantenido bajo arresto domiciliario durante tres años, mientras el juez Baltasar Garzón intentaba procesarle por crímenes contra la humanidad. Más recientemente un comité del Senado de Estados Unidos, en el transcurso de una investigación sobre blanqueo de dinero bajo el manto de la Patriotic Act, descubrió que el dictador mantenía decenas de millones de dólares en cuentas secretas, principalmente en el Riggs Bank con sede en Washington. Estos dos hechos provocaron las vistas judiciales en Chile que han servido para que el movimiento de los derechos humanos haya podido hacer avances reales en la investigación, tanto de los crímenes cometidos por el régimen de Pinochet, como de su enriquecimiento personal. En 1998 Pinochet perdió todas sus batallas judiciales, escapándose de muchas de ellas fingiendo locura y otras enfermedades; a la tumba le acompañaron docenas de procesos en su contra. Muchos de sus generales y compinches han tenido menos suerte. Cientos de ellos han sido juzgados y condenados, y docenas se encuentran ahora encarcelados, en unas cárceles especiales y cómodas, pero en la que pasaran el resto de sus vidas acompañándose los unos a los otros, lo que ya es un castigo bastante grande en sí mismo. Esto incluye a todos los responsables de la mortal y todopoderosa DINA, dirigida por el propio general Contreras, que fueron acompañados en su ingreso en prisión en 2006 por una lluvia de insultos, escupitajos, huevos y tomates podridos lanzados por los familiares de sus víctimas.

La oscura historia de la represión ha sido reconstruida por completo y han salido a la luz todavía más horrores. Hubo que esperar a diciembre de 2007, para que el juez que investigaba el asesinato de los sucesivos líderes del Partido Comunista, descubriera la existencia de una unidad secreta que agrupaba a todos los órganos represivos, que informaba directamente a Pinochet y que tenía su centro de operaciones en un confortable barrio residencial. Esta unidad fue responsable de torturas y asesinatos y utilizaba el helicóptero personal de Pinochet para tirar al mar los cuerpos de sus víctimas y de algunos que todavía no habían muerto. Resulta irónico que los principales cambios ocurridos en Chile durante este periodo se gestaran en incidentes imprevistos en Londres y Washington, habida cuenta del papel que jugaron estas capitales en la llegada en 1973 de Pinochet al poder. Sin embargo, por muy importantes que fueran estos acontecimientos, lo que marcó la diferencia fueron los avances de los de-

rechos humanos en el propio Chile, que ha sido el principal camino por el que ha ido avanzando la democratización del país.

El sistema político de la transición, por otra parte, se ha mostrado incapaz de romper con su pacto fundacional, que aseguraba la impunidad de Pinochet y de sus cómplices. Hay que esperar a la llegada de Bachelet a la presidencia para que finalmente esto empezase a cambiar. Pinochet fue rescatado en marzo de 2000 de su arresto domiciliario en Londres, principalmente gracias a la presión del gobierno chileno con la ayuda del ministro de Asuntos Exteriores británico Jack Straw. En Chile, prácticamente todos los poderes institucionales se oponían a la continuación de las causas judiciales contra él. En un momento dado, un encuentro en el Palacio de la Moneda convocado con este propósito explícito, reunió al presidente Lagos, a los portavoces de ambas cámaras parlamentarias, a los líderes de todos los partidos representados en el parlamento junto a los jefes de las Fuerzas Armadas. También se encontraban presentes cardenales, obispos y otras jerarquías religiosas, junto a la significativa presencia de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Apelaciones de Santiago, donde se iba a celebrar la vista contra el dictador la siguiente semana. La reunión recibió los mensajes de apoyo del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Anan y del propio Papa. A pesar de todo, Pinochet perdió por 14 votos en contra por 5 a favor en el Tribunal de Apelaciones, y semanas más tarde corría peor suerte en el Tribunal Supremo. Esto supuso la pérdida de su inmunidad como antiguo jefe de Estado y abrió la puerta para encausarle tanto a él como a sus cómplices. Todo esto sucedió durante el largo verano chileno de 2001.

¿Cómo consiguieron estos logros un grupo aparentemente frágil de ancianas madres, mujeres e hijos de las víctimas de Pinochet? ¿Cómo pudo un pequeño grupo de abogados de los derechos humanos, brillantes y comprometidos, pero aparentemente desorganizados, enfrentarse y derrotar a los más famosos abogados criminalistas del país que se habían hecho cargo de la defensa de Pinochet, ante unos tribunales que normalmente estaban predisuestos hacia él? Como sucedió con los incidentes de Washington y Londres, básicamente fue una consecuencia de la repulsión universal y duradera contra Pinochet y sus crímenes. En Chile, cualquiera que recorra las calles en compañía de figuras reconocidas del movimiento de los derechos humanos, puede ser testigo del respeto con que son saludados en todas partes por gente corriente que se encuentra a salvo en el anonimato de la calle. Desde un grupo de jóvenes en un todoterreno en uno de los barrios de moda de Santiago, a un modesto autobús renqueando por alguna remota carretera del sur del país lleno de campesinos llevando sus sacos y pollos vivos, alguien señalará a la figura del defensor de los derechos humanos y todo el mundo se unirá en un saludo emocionado. En el caso de Juan Guzmán, un hombre de procedencia conservadora que se convirtió en el primer juez que condenó a Pinochet, durante mucho tiempo no podía ir a comer sin que los comensales del restaurante le ofrecieran una sonora ovación. Puede ser una escena que se repita,

y una evidencia de que la memoria histórica no se desvanece necesariamente, incluso entre la gente que parece estar embriagada por la modernidad, los centros comerciales y las tarjetas de crédito.

Tierra de rumores

En Chile actualmente parecen estar presentes dos de las condiciones clásicas de los grandes cambios políticos. Por una parte, una amplia mayoría parece estar plenamente convencida de la necesidad de «cambiar el modelo», y de lo que se necesita para remplazarlo. Quieren poner fin al extremismo de un mercado neoliberal y restaurar un mayor compromiso del Estado en todos los aspectos de la vida económica y social. Por la otra, «los que están arriba» son claramente incapaces de continuar manejando los asuntos de la misma manera en que lo han hecho durante la década pasada. Tanto la coalición gobernante como la oposición conservadora se encuentran actualmente confusas, con significativas divisiones dentro de cada una de ellas. La propia presidenta Bachelet es una prueba viviente de semejante confusión. Intentó efectuar un corte neto con los cuadros gubernamentales que había manejado los asuntos desde 1990. Al principio empezó con fuerza, declarando que para cubrir los puestos de gobierno buscaría la paridad entre hombres y mujeres, lo que suponía el cambio del personal de más edad, prácticamente masculino en su totalidad y que evitaría el «repetir puestos», es decir, que no confirmaría a los altos funcionarios que hubieran tenido posiciones de gobierno similares. Sin embargo, su considerable debilitamiento, especialmente después del desastre del «TranSantiago», la ha obligado en los últimos meses a replegarse y restablecer el poder de las fuerzas neoliberales dentro de su gobierno. Sin embargo, no resultaría extraño que volviera a inclinarse a la izquierda si la situación política cambia significativamente en los próximos meses.

Para que esto suceda, debe aparecer la tercera condición clásica de los cambios, una condición que normalmente aparece de manera inesperada: los que se encuentran abajo no solamente deben estar convencidos de la necesidad del cambio, sino que deben estar tan hartos de la situación presente como para que salgan resueltamente a la calle para exigirlo. Esto podría suceder si el actual clima de tensa exasperación cuaja en una amplia movilización de las fuerzas sociales más significativas, especialmente de la emergente clase de asalariados urbanos. Los chilenos saben mucho de estas condiciones. Muchos han vivido crisis nacionales por lo menos dos veces en su vida, la primera con Allende, a finales de la década de 1960 y principios de 1970, y la segunda en la década de 1980 con Pinochet. Saben que no se puede alcanzar demasiadas cosas si estas tres condiciones no se producen. Por otra parte, han aprendido que incluso cuando se dan esas condiciones, es tan necesario como posible el que la gente se una en un frente amplio y fuerte para hacer que el cambio se materialice en términos concretos, para luego hacer lo necesario, actuando sin ninguna duda. También han aprendido que el resultado no es siempre el que se

espera, incluso puede ser diferente por completo a lo que inicialmente se quería. De cualquier forma los cambios se producen igualmente.

Esta es la razón por la cual, en palabras de Pablo Neruda, «nuestra tierra se ha llenado de rumores», rumores de cosas excitantes que podrían ocurrir. Las condiciones para que la época de la transición acompañe a Pinochet a la tumba pueden estar dadas y Chile pueda reconstruir las instituciones democráticas plenas. Aún más, puede que los actuales temblores de la sociedad chilena no se deban solamente a las impacientes demandas para que esta transición sin fin acabe de una vez. Quizá algo más se esté moviendo por debajo de la superficie de los acontecimientos actuales, en el calor del magma de esas fuerzas que producen grandes cambios en las placas tectónicas de la sociedad, la economía y la política. No resulta imposible que los acontecimientos puedan provocar finalmente el fin del *modelo*, el periodo neoliberal que incluso en Chile no parece destinado a sobrevivir mucho tiempo a su criminal progenitor. Pinochet abanderó el Consenso de Washington, décadas antes de que llegara a aceptarse y triunfara por toda la región, aunque de manera menos radical a como sucedió en Chile. Su muerte coincide significativamente con el momento en que el apoyo de América Latina a esa estrategia parece estar llegando a su fin.

REVIEW

FERNAND BRAUDEL CENTER

A Journal of the
**Fernand Braudel Center for the Study of
Economies, Historical Systems, and Civilizations**

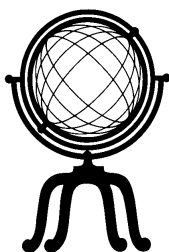
Vol. XXX includes articles by Boaventura de Sousa Santos, "Beyond Abyssal Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges," and Immanuel Wallerstein, "Naming Groups: The Politics of Categorizing and Identities," and a special section in appreciation of the work of Stephen G. Bunker

Previous Special Issues and Sections still available include:

- XXIX, 2, 2006 — **Decolonizing Postcolonial Studies**
XXVIII, 4, 2005 — **In Honor of Vitorino Magalhães Godinho**
XXVIII, 2, 2005 — **Discussions of Knowledge**
XXVIII, 1, 2005 — **The Black World and the World-System**
XXVII, 4, 2004 — **The Environment and World History**
XXVII, 3, 2004 — **Russia and Siberia in the World-System: German Perspectives**
XXVII, 1, 2004 — **Directions for World-Systems Analysis?**
XXVI, 2, 2003 — **Ecology of the Modern World-System**
XXV, 3, 2002 — **Utopian Thinking**
XXIV, 1, 2001 — **Braudel and the U.S.: *Interlocuteurs variables?***
XXIII, 4, 2000 — **Development Revisited**
XXIII, 1, 2000 — **Commodity Chains in the World-Economy, 1590–1790**
XXII, 4, 1999 — **Caribbean Migrants to Core Zones**
XXII, 3, 1999 — **ReOrientalism?**

A brochure containing the Table of Contents of past issues is available on request.

Institutions \$125/yr.
Individuals \$28/yr.
Non-U.S. addresses,
postage \$8/yr.
Special rate for low gnp
per capita countries \$10/yr.



Managing Editor, *Review*
Fernand Braudel Center
Binghamton University
State University of New York
PO Box 6000
Binghamton, NY 13902-6000